

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Radicado: 110013335009 2019 00100 00
Demandante: Yurica Patricia Arteaga Tilve
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
(Impedimento)

1. ANTECEDENTES

1.1.- En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada el 12 de marzo de 2019 por la señora **Yurica Patricia Arteaga Tilve**, pretende que se inaplique el Decreto 382 de 2013 en su artículo 1, específicamente en lo que hace a la expresión <<constituirá solamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud>> y declare la nulidad del oficio 20183100046991 del 12 de julio de 2018 y de la Resolución nro. 23241 del 10 de octubre de la misma anualidad.

1.2.- A título de restablecimiento del derecho, se reconozcan las primas, cesantías, vacaciones, intereses e indemnizaciones que a la fecha no han sido canceladas por la FGN, desde la creación de la bonificación.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Corresponde establecer a este Despacho si para conocer del presente asunto se encuentra impedido, por la causal de tener interés en el resultado del proceso, dado que la controversia se refiere al reconocimiento como factor salarial de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, bonificación que fue creada en idénticos términos para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial a través del Decreto 383 de 2013.

2.2. Al respecto la Ley 1437 de 2011 en su artículo 130 enumera algunas causales específicas de impedimento, pero además remite a aquellas previstas en el artículo 141 del CGP, dentro de las cuales se resalta:

<<Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso**>>. (Negrilla del despacho).

De conformidad con esta norma, cuando el juez tiene interés directo o indirecto en las resultas del proceso, para garantizar la objetividad y la recta administración de justicia, debe declararse impedido para conocer de la controversia; así mismo, el artículo 131 del CPACA es claro en precisar que el impedimento deberá declararse apenas se advierta de su existencia.

2.3. Ahora bien, esta sede judicial venía conociendo de los procesos promovidos en contra de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que el Consejo de Estado¹, había señalado tiempo atrás que:

<<Corolario de lo anterior, observa la Sala que las disposiciones que regulan el tema salarial de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, no se relacionan con las normas aplicables a los funcionarios de la Rama Judicial, como son entre otros, los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que manifestaron su impedimento.

En conclusión, dicho evento no atenta contra la imparcialidad del juez, dado que con el resultado del proceso en ningún momento beneficiaría a los solicitantes del impedimento>>.

Posición que había sido asumida también con anterioridad por el mismo órgano de cierre de esta jurisdicción, en providencia del 10 de marzo de 2016² en donde examinó el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial y estableció que son sustancialmente diferentes, de modo que no existe interés directo o indirecto en las resultas del proceso, por parte de los funcionarios judiciales que deben resolver esta clase de procesos.

2.4. Sin embargo, ante el cambio de interpretación acogido por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través de la providencia de la Sección Segunda adiada el 27 de septiembre de 2018³, en el cual se precisó que se **replantea** la posición anterior, por las siguientes consideraciones:

¹ Mediante providencia del 19 de octubre de 2017, proferida dentro del proceso 25000234200020160337501, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, exp. 05001-23-33-000-2015-00064-01(1235-15), CP: Gabriel Valbuena Hernández. Demandante: Olga Luz Arrubla de Montoya; Demandado: Fiscalía General de la Nación.

³ Con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, dentro del proceso 25000234200020160337501.

<< De lo anterior, se extrae que si bien una y otra prima especial se encuentran reguladas en instrumentos normativos diferentes, lo cierto es que el objeto de discusión en este proceso es el **carácter salarial** del porcentaje devengado a título de prima especial de servicios, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que podría conllevar a un beneficio para los Magistrados que integran esta Corporación.

(...)

La intervención como jueces de conocimiento, afectaría la posición de neutralidad que debe caracterizar al funcionario judicial. El interés indirecto que tiene el conjunto de magistrados en la actuación judicial, hace que no se preserve la idoneidad suficiente que podría llevar a alterar el juicio de los funcionarios, restándole eficacia a los atributos de independencia, equilibrio e imparcialidad que deben determinar la función judicial>>.

2.5. Esta sede judicial recoge su postura y procede a manifestar impedimento para conocer de este asunto, toda vez que la aquí demandante solicita la inaplicación de algunas expresiones contenidas en el Decreto 382 de 2013 y que a la bonificación judicial que allí se consagra **se le reconozca carácter salarial para liquidar la totalidad de haberes salariales y prestacionales**, mientras que, a través del Decreto 383 de 2013 también se creó para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial de una bonificación judicial en los mismos términos, razón por la cual al referirse el litigio los criterios de la remuneración salarial similar al de los servidores de la Fiscalía, sobre los judiciales se tiene un interés directo.

Por lo expuesto, el despacho considera que la definición de la controversia involucra el interés de todos los jueces de la República por interés en el proceso, previsto en el artículo numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso como causal de impedimento y recusación.

En ese orden de ideas, de conformidad con el numeral 2º del artículo 131 del CPACA⁴, cuando un juez estima que una causal de impedimento comprende a todos los jueces administrativos, el expediente pasará al superior para que, de ser aceptado, se designe conjuéz para el conocimiento del asunto.

⁴ <<Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:
(...)

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuéz para el conocimiento del asunto>>.

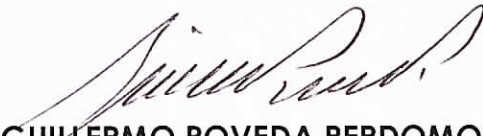
En el mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE:

PRIMERO-. DECLARAR EL IMPEDIMENTO que comprende a todos los jueces administrativos, para conocer de la presente demanda, por tener interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO-. REMÍTASE el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo de su cargo, de conformidad al artículo 131 numeral 2º del CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

SCVE

<p>JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA DC, SECCIÓN SEGUNDA</p> <p>NOTIFICACION POR ESTADO</p> <p>El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.</p> <p>MIRYAM YANNETH MARTÍNEZ CORTÉS Secretaria</p>
